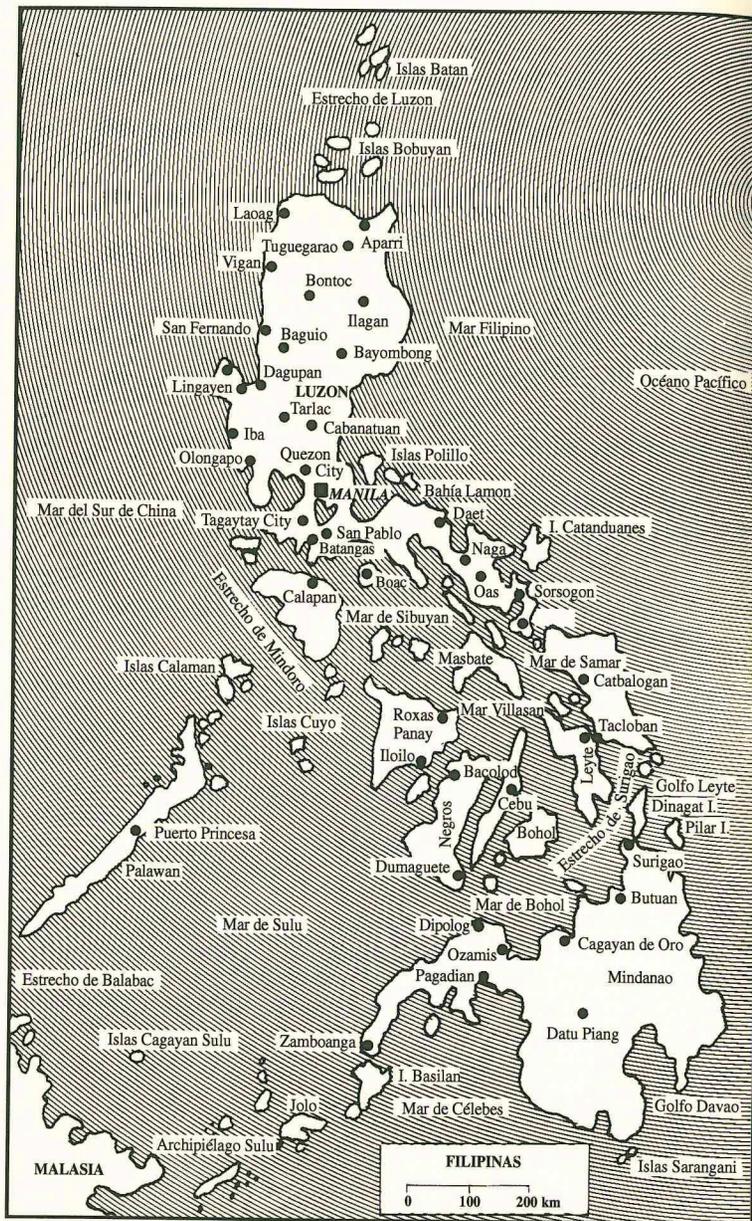


FILIPINAS



FILIPINAS EN 2006

ASUNCIÓN BENÍTEZ-RUSH
Tempe, Arizona, Estados Unidos

INTRODUCCIÓN

Al parecer, Filipinas sólo sale de una crisis para entrar en otra. Cuando el país aún no se recupera de los problemas fiscales surgidos dos años atrás, de nuevo se encuentra inmerso en una crisis política aún más paralizante. Por un lado, está la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo resuelta, hasta la terquedad, a conservar el poder pese a las crecientes acusaciones de corrupción y fraude electoral en su contra. Por otro, está una oposición decidida, aunque dividida, que parece ganar simpatizantes conforme más gente se siente desilusionada con el liderazgo de Arroyo y prefiere el cambio.

Con un mandato presidencial que se extiende hasta el 2010, Arroyo ha pasado a la historia como el presidente más impopular del país en el periodo posterior a Marcos. Cuando, a mediados de los ochenta, las Social Weather Stations (SWS), organismo de encuestas independiente, comenzó a seguir los índices de satisfacción pública en torno de los presidentes, únicamente Arroyo obtuvo cifras negativas. En marzo de 2003, recibió una calificación baja (menos 14%) cuando decidió incluir a Filipinas dentro de la Coalición de Buena Voluntad que apoyó a Estados Unidos durante la guerra de Iraq. En mayo de 2005, su índice de popularidad descendió drásticamente, a menos 33%, y ha permanecido negativo durante nueve encuestas consecutivas;¹ fue en agosto de 2004 cuando obtuvo índices positivos por última vez. En cam-

¹ Mia M. González, "Team Players", *Newsbreak*, 13 de febrero, 2006, p. 12; Social Weather Stations, "Third Quarter 2006 Social Weather Survey: Net Satisfaction with PGMA Inches Up to-11", 12 de octubre, 2006, disponible en <http://www.sws.org.ph/>

bio, incluso en los momentos más críticos del juicio político en su contra, en diciembre de 2000, el presidente Joseph Estrada, posteriormente depuesto, aún gozaba de un índice de aprobación de nueve por ciento.

TEMAS SOCIOPOLÍTICOS

Bagaje político

Actualmente prevalece en el país un sentimiento de enorme desasosiego debido, en gran medida, a lo que el público considera una acumulación de controversias sin resolver en torno de la presidenta Arroyo. En 2005, las declaraciones de un respetado arzobispo sobre el *jueteng* —juego de azar ilegal practicado esencialmente por los pobres— dieron lugar a una investigación del Senado. Hubo comparecencias transmitidas por televisión de operadores confesos de *jueteng*, que nombraron a funcionarios de alto rango y a personas bien relacionadas que cada mes recibían sobornos de los señores del juego. Entre los mencionados, estaban el esposo de la presidenta, Miguel “Mike” Arroyo, su hijo, el congresista Mikey Arroyo, y su cuñado, el congresista Ignacio Arroyo. Un testigo declaró que entregaba personalmente dinero a ambos congresistas en la Cámara de Representantes, por órdenes de un jefe de *jueteng*. Los tres parientes de la presidenta negaron las acusaciones y presentaron demandas por difamación. La presidenta ordenó al Departamento de Justicia investigar el asunto, pero ha sido el ombudsman, un antiguo compañero de clase de Mike Arroyo en la escuela de leyes, quien se hizo cargo del caso posteriormente. Aunque Mikey Arroyo pidió una “licencia temporal” al Congreso y su padre se exilió voluntariamente en el extranjero durante unos meses, las acusaciones empeoraron la percepción pública de corrupción y abuso de autoridad por parte de la familia Arroyo y, por extensión, por parte de la presidenta misma.

Otro asunto pendiente que empaña la reputación de la presidenta consiste en el uso indebido de fondos, por un valor de 2 800 millones de pesos filipinos, provenientes del Departamento de Agricultura.² Una investigación del Senado, en 2005, reveló que aquellos fondos —destinados a subsidiar la adquisición por parte de campesinos de fertilizantes y semillas— se desviaron para repartirse a políticos locales, a fundaciones espurias y a organizaciones no gubernamentales

² Aries Rufo, “A Scam That Won’t Go Away”, *Newsbreak*, 13 de febrero, 2006, p. 15. La moneda mencionada en el ensayo, a menos que se especifique otra cosa, se refiere a pesos filipinos. La fluctuante tasa de cambio se calculó en un dólar por 50 pesos filipinos.

(ONG), días antes de las elecciones de 2004. Todo parece indicar que el dinero se utilizó para financiar la campaña de la presidenta Arroyo y de sus aliados. El supuesto cerebro de este plan, un antiguo subsecretario de Agricultura y conocido amigo del esposo de Arroyo, huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político; actualmente se encuentra detenido por violaciones migratorias.

La crisis, en la que la presidenta Arroyo estuvo a punto de perder el mando, tuvo como detonante las grabaciones de las conversaciones por teléfono celular entre ella y el comisionado electoral, Virgilio Garcilano, durante las elecciones de 2004. Popularmente conocidas como las cintas Hello Garci, las grabaciones sugieren que, mediante su poder, Arroyo quiso influir en los resultados electorales.³ Aunque miembros de la oposición habían acusado anteriormente a Arroyo de fraude, hasta que las grabaciones se hicieron públicas, en 2005, no existían pruebas que sustentaran tales imputaciones. En consecuencia, sobrevino un sinnúmero de acusaciones y contraacusaciones entre las partes, a favor y en contra de Arroyo, sobre la ilegalidad de las grabaciones, su adulteración digital, el secuestro de posibles testigos e incluso sobre un encubrimiento oficial. Se supo que el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas (ISAFP, por sus siglas en inglés) realizó las grabaciones por órdenes provenientes de Malacañang, porque la gente de la presidenta no confiaba en Garcilano.⁴ Con el fin de minimizar el incidente, Arroyo leyó un discurso cuidadosamente redactado a través de la televisión nacional, en el que reconoció que “fue una falta de juicio” llamar por teléfono a un funcionario electoral, cuyo nombre no mencionó; pero se negó rotundamente a confirmar que la voz de las grabaciones fuera suya. Por su parte, Garcilano abandonó el país misteriosamente y reapareció meses después para encarar la investigación del Congreso, que no arrojó resultados concluyentes.

Fuerzas contrarias a Arroyo

Las controvertidas cintas Hello Garci dañaron sobremanera la reputación de la presidenta Arroyo. En 2005, un grupo constituido esencialmente por sol-

³ Philippine Center for Investigative Journalism (de aquí en adelante PCIJ), “‘Hello, Garci?’ Transcripción de una grabación de tres horas (29 de mayo, 2004)”, edición especial, *I Report*, s. f., p. 41.

⁴ PCIJ, “The Tangled Tale of the Tapes”, *I Report*, edición especial, s. f., pp. 5-6. Malacañang es la residencia oficial de los presidentes de Filipinas desde 1935 y a menudo el término también se refiere a la Oficina de la Presidencia.

dados retirados formó la Coalición para la Salvación Nacional, e hizo un llamado para crear un gobierno de transición revolucionaria con el propósito de sustituir la administración de Arroyo. Mientras, diez funcionarios del gabinete, a quienes la prensa denominó Los diez del Hyatt, sorprendentemente renunciaron en masa al tiempo que pedían a la presidenta que hiciera lo mismo, para librar al país de ulteriores ruinas económicas.⁵ Al anticipar la jugada de este grupo y con el fin de mitigar una reacción política violenta, Arroyo pidió a todos los miembros de su gabinete que renunciaran el día anterior.

Curiosamente, una amalgama de fuerzas con creencias políticas contrastantes se hallaron en la misma posición: en contra de la presidenta Arroyo. La ex presidenta Corazón Aquino, junto con destacadas figuras de la academia y de las ONG; algunos miembros valerosos de la Iglesia católica; el influyente Makati Business Club; agrupaciones de abogados, como el Grupo de Asistencia Legal Gratuita; miembros destacados de una facción del Partido Liberal; familiares y seguidores de los ex presidentes Marcos y Estrada; organizaciones izquierdistas, todos ellos se unieron al llamado por la renuncia de Arroyo. Incluso Susan Roces, popular actriz y viuda del candidato presidencial derrotado, Fernando Poe hijo, pidió la renuncia de Arroyo, y la acusó de haber robado la presidencia “no una, sino dos veces”.⁶

Estado de emergencia nacional

El 24 de febrero, varios grupos contrarios a Arroyo convocaron a una “marcha por la paz” y a una concentración para conmemorar el vigésimo aniversario de la Revolución del Poder del Pueblo, que derrocó al presidente Marcos. El día anterior a la marcha, el gobierno descubrió que el plan también incluía la participación, no autorizada, de policías de la Fuerza Especial de Acción, de los marines y de las tropas de élite (Scout Rangers), cuyos oficiales pretendían anunciar que retirarían su apoyo al comandante en jefe. Fueron arrestados los dirigentes militares de esta maquinación, a pesar del inten-

⁵ Los diez funcionarios del gabinete hicieron su anuncio en el Hotel Hyatt de Manila, de ahí el nombre del grupo.

⁶ En referencia, primero, a la toma del cargo de presidente por la entonces vicepresidenta Gloria Macapagal-Arroyo tras la deposición de Joseph Estrada y, segundo, como resultado de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2004. Véase PCI, “Despite Susan, the Opposition Is Not Quite Smelling Like Roses”, *I Report*, edición especial, s. f., pp. 8-11.

to desesperado y fallido de un grupo de marines por convocar, desde sus cuarteles, a ejercer el “poder del pueblo”.

Tras numerosas reuniones en el Palacio de Malacañang y en diversos campos militares, el 24 de febrero apareció Arroyo en la televisión y en la radio nacionales anunciando que la conspiración de la “extrema izquierda” y de la “extrema derecha”, destinada a derrocar a su gobierno, había sido suprimida. Mediante la proclamación 1017, declaró el estado de emergencia nacional; su gran preocupación —dijo— eran los efectos adversos de desestabilización de la economía. Afirmó que esta decisión pretendía evitar las repercusiones negativas que aquejaron al país después del violento golpe de Estado de 1989. El gobierno identificó al Partido Comunista de Filipinas (PCF) y a militares aventureros de derecha como las fuerzas desestabilizadoras, instigadas por un sector “irresponsable” de los medios. De hecho, este intento contó con el apoyo del mayor espectro de grupos de la sociedad civil en la historia de los golpes del país. Organizaciones que previamente se habían opuesto a cualquier intervención militar en la política estaban dispuestas ahora a aliarse con las fuerzas armadas para producir el cambio. Pero el golpe de febrero fracasó básicamente porque los grupos militares rebeldes estaban divididos y no contaban con el apoyo de altos oficiales de las fuerzas armadas y de la policía. Por otra parte, no hubo un arrebato masivo, espontáneo, de apoyo público, tal como había sucedido durante las insurrecciones populares de 1986 y 2001.

No obstante, lo que originó un consenso general fue el temor de que la proclamación 1017 resultara similar al decreto de Ley Marcial de Marcos (proclamación 1081), mediante el que se perpetuó el régimen del dictador durante más de dos décadas. Dicho temor se incrementó cuando varios ciudadanos prominentes fueron arrestados, sin orden de detención, por participar en protestas callejeras pacíficas el 24 de febrero. Los militares también intentaron arrestar a cinco miembros de izquierda de la Cámara de Representantes por cargos de rebelión que se dictaron dos décadas atrás. Al día siguiente, la policía allanó las oficinas editoriales de un pequeño periódico del área metropolitana de Manila (conocida como *Metro Manila*), opuesto a Arroyo; acto que los medios de difusión filipinos, que son sumamente independientes, denunciaron enseguida. Grupos internacionales de periodistas, legisladores, así como otros sectores, también condenaron el allanamiento y otros intentos gubernamentales por controlar los medios. El clamor público hizo que la presidenta Arroyo revocara el estado de emergencia una semana después de su proclamación.

Demanda de enjuiciamiento político

En julio, los oponentes de la Cámara de Representantes a la presidenta Arroyo introdujeron, por segunda ocasión, un procedimiento de juicio político en su contra; la acusaron de manipular las elecciones presidenciales de 2004, de corrupción, de violación de derechos humanos y de otros delitos constitucionales. Pero la Cámara Baja, controlada por su partido, rápida y abrumadoramente votó a favor de que se eliminara la demanda. El primer intento de juicio a Arroyo fue en 2005, aunque también en esa ocasión se desechó. De acuerdo con la Constitución, la Cámara Baja puede iniciar un procedimiento de juicio solamente una vez al año.

Fue un alivio para la presidenta que la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas no se uniera a las voces que exigían su enjuiciamiento o su renuncia. La Iglesia católica romana desempeñó un papel clave en la destitución de los presidentes Marcos y Estrada. La Conferencia publicó una carta pastoral, en julio, en la que afirmó que los obispos “no estaban dispuestos, por el momento, a apoyar el juicio como medio para establecer la verdad”, en alusión a la cuestionable victoria de Arroyo en las elecciones de 2004.⁷ Algunos observadores afirman que, al parecer, la administración de Arroyo se afana en ganarse sistemáticamente a los obispos cuando surgen asuntos políticos importantes. Para ello les ofrece incentivos materiales, como reembolsos de gastos de viaje o medicinas accesibles y comida en sus diócesis, e incluso alicientes legales, como el proyecto de ley que respaldó la Iglesia católica para abolir la pena de muerte y que aprobó como ley la presidenta poco antes de su visita al Vaticano en junio.⁸

Cambio de la Constitución

Ya a principios de 2003, Arroyo había mostrado su preferencia por un sistema parlamentario de gobierno en lugar del presidencial en vigor. En su Informe del Estado de la Nación de 2005, dijo que ya era tiempo del “gran debate sobre el cambio de la Constitución”, porque el actual sistema político “se había convertido en un obstáculo para nuestro progreso nacional” y agregó que el país avanzaría con mayor rapidez “con un sistema parlamentario similar al

⁷ Aries C. Rufo y Probe, “Just Like Politicians”, *Newsbreak*, 14 de agosto, 2006, p. 11.
⁸ *Ibidem.*; Gemma B. Bagayaua, “No More Death?”, *Newsbreak*, 5 de junio, 2006, p. 12.

de nuestros vecinos progresistas de la región”.⁹ Los opositores de Arroyo tacharon la posición de la presidenta como un intento por desviar la atención de las acusaciones en su contra. Los comentarios anteriores de que su mandato se acortaría cesaron cuando muchos se dieron cuenta de que se las podía arreglar para quedarse en el cargo hasta el 2010, ya fuera como una gobernante autoritaria respaldada por los poderes de emergencia o como una dirigente blanda que presidiera la transición de un sistema presidencial a uno parlamentario. Cabe notar que el ex presidente Fidel Ramos y el presidente de la Cámara de Representantes, José de Venecia, desde 1992 exigían un cambio en la Constitución (*Charter change*, en inglés, que los filipinos, tan aficionados a los juegos de palabras, llaman “Cha-cha”) para crear un sistema parlamentario.

Se argumenta que un sistema parlamentario, que contara con un primer ministro emanado de las filas de los partidos con más escaños legislativos, constituiría un régimen más flexible y responsable, y evitaría los estancamientos legislativos. Los críticos afirman, sin embargo, que un sistema parlamentario no sería del todo adecuado para Filipinas pues el país posee una red de partidos débil, con una escasa disciplina del voto en ambas cámaras del Congreso, donde los legisladores a menudo tejen alianzas con el fin de obtener poder y padrinzagos.¹⁰ Algunos observadores destacan que tanto De Venecia como Ramos tienen puesta la mirada en el cargo de primer ministro en caso de que se dé el cambio.

La ley ofrece varias vías para el cambio constitucional: 1) mediante el Congreso, por la votación de tres cuartas partes de los miembros de ambas cámaras, proceso que se lleva a cabo por separado; 2) mediante una convención constitucional (“Con-con”), compuesta por delegados electos de los mismos distritos donde son elegidos los representantes legislativos; 3) mediante las dos cámaras del Congreso convocadas como asamblea constituyente (*constituent assembly*, en inglés, por lo que humorísticamente se le llama “Con-ass”, *ass*, trasero); y 4) por medio de una iniciativa popular, en la que, al menos, 12% de los votantes registrados en todo el país hayan firmado la enmienda propuesta, además de que cada distrito legislativo debe estar representado por un mínimo de 3% de sus votantes registrados. Esta última posibilidad ha desencadenado amplios debates debido a que, según algunos expertos, sólo es

⁹ “State of the Nation Address of President Gloria Macapagal-Arroyo During the 2nd Regular Session of the 13th Congress of the Republic of the Philippines”, 5 de julio, 2005, disponible en <http://www.gov.ph/sona/sonatext2005.asp>

¹⁰ Zinnia de la Peña, “Investors Back Shift to Parliamentary”, *Philippine Star*, 11 de julio, 2005.

aplicable a las reformas constitucionales (o a cambios fragmentarios, menores) y no a revisiones mayores, como es el caso del paso de una forma de gobierno presidencial a otra parlamentaria.

En 2005, la presidenta nombró una Comisión Constitucional Consultiva a fin de estudiar la Constitución de 1987 y recomendar un proyecto de Constitución. La administración de Arroyo desea tres cambios generales: el cambio de forma de gobierno presidencial a parlamentario, la transformación de la estructura política de unitaria a federal y la apertura de ciertas industrias a la propiedad extranjera. Estos tres aspectos se abordaron en el proyecto de Constitución. No obstante, las propuestas de la Comisión de eliminar las elecciones de 2007 y extender los mandatos de todos los funcionarios designados electoralmente hasta el 2010 generaron una protesta pública. Puede que ambos apartados se incluyan en las Disposiciones Transitorias del proyecto para que el cambio al sistema parlamentario fuera mejor aceptado, especialmente por los legisladores en funciones y los funcionarios locales. Algunos críticos atacaron las Disposiciones Transitorias porque garantizaban que Arroyo terminara su mandato con sus poderes intactos y, virtualmente, sin temor a ser enjuiciada, pues el proceso en su contra requeriría dos tercios de los votos de todos los miembros del parlamento interino.¹¹ En la actual Constitución, sólo se requiere un tercio de los votos de la Cámara Baja para el enjuiciamiento. El parlamento interino, al que se refiere el proyecto, estaría conformado probablemente por los actuales legisladores de ambas cámaras y los miembros del gabinete.

La presidenta Arroyo abandonó su plan original de apoyar un Con-con porque sería lento y costoso. Prefiere el Con-ass porque representa la forma más rápida y barata de reformar la Constitución. A pesar de que la Cámara baja, dominada por los aliados de Arroyo, se inclina por esta opción, el Senado la rechazó. Varios analistas creen que si la mayoría de los senadores se oponen al Con-ass es porque la legislatura terminaría siendo un sistema unicameral, que probablemente aboliría al Senado. Intentos recientes de reformar la Constitución mediante la iniciativa popular, encabezados por dos ONG y apoyados por el presidente de la Asamblea Legislativa, De Venecia, fracasaron en gran parte por una decisión de la Suprema Corte, que impuso la promulgación de una "ley que permitiera en forma suficiente" la aplicación de tal medida, algo que el Congreso no ha abordado.

¹¹ Solita Collas-Monsod, "Brazen Lies and Karma", *PDI*, 1 de abril, 2006, disponible en http://news.inq7.net.opinion/index.php?index=2&story_id=71265

ASPECTOS DE SEGURIDAD

Politicización de las Fuerzas Armadas

Se dice que la presidenta Arroyo politizó las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional Filipina aún más que sus predecesores, Joseph Estrada y Fidel Ramos (este último fue oficial militar).¹² La presidenta ofreció beneficios, promociones y acceso especial a su oficina a cambio de lealtad y apoyo. Arroyo ha cultivado especialmente la lealtad del servicio militar de inteligencia. Durante su mandato escogió personalmente a todos los comandantes del ISAFP, y los oficiales de esta organización pueden comparecer directamente ante ella y su marido, y saltarse la cadena de mando.¹³ Por otra parte, para la presidenta la lealtad personal parece ser el factor decisivo en la selección de los altos mandos militares y de la policía. Arroyo le asestó un duro golpe a la moral y al profesionalismo de la AFP cuando promovió a dos oficiales, implicados en el escándalo Hello Garci, a puestos militares de primera importancia, en lugar de ascender a quienes recomendaba el Consejo de Generales. En cambio, dos altos oficiales de la armada que atestiguaron en el Senado cómo la administración usó a los militares en el fraude electoral en Mindanao, fueron inmediatamente destituidos. Algunos analistas sostienen que un ejército cada vez más dividido —como el de hoy— y tropas dirigidas por oficiales descontentos y politizados, insatisfechas y desmoralizadas, podrían desembocar en una ruptura de la cadena de mando y en futuras confrontaciones sangrientas.

Rebelión comunista

El gobierno de Arroyo se ha impuesto la meta de erradicar a todos los grupos rebeldes antes de que termine el mandato de la presidenta en 2010. En particular, Arroyo quiere someter a la insurgencia dirigida por el CPP, que existe desde hace 38 años, y a su ala armada, el Ejército Nuevo del Pueblo (NPA, siglas en inglés) mediante la movilización de las agencias y recursos del gobierno

¹² Sheila S. Coronel, "The Unmaking of a President", *PCII*, edición especial, *I Report*, s. f., p. 3.

¹³ *Ídem*.

¹⁴ Fe Zamora, "GMA War Endgame vs NPA", *Philippine Daily Inquirer* (a partir de ahora *PDI*), 18 de junio, 2006, pp. A1, A10.

bajo un plan maestro de contrainsurgencia.¹⁴ En junio, Arroyo ordenó la liberación de 1 000 millones de pesos filipinos adicionales para la AFP destinados a combatir la insurgencia comunista. Asimismo, garantizó 75 000 millones del presupuesto, que serán entregados durante tres años, con el fin de financiar proyectos de desarrollo en Luzón del Norte, una plaza fuerte del NPA. Al parecer, la administración de Arroyo cambió de posición y decidió aplicar mano dura contra el movimiento comunista (lo que representa una reminiscencia del régimen de Marcos) y decidió dar marcha atrás a la política oficial de legalización del CPP, que pedía a sus miembros que abandonaran la lucha armada y participaran como partido en las elecciones.

El gobierno de Arroyo, mediante esfuerzos diplomáticos, logró que la NPA se incluyera en las listas de terroristas de la Unión Europea (UE). Una consecuencia directa de esto es que el fundador del CPP, Jose Maria Sison, que vive en los Países Bajos, y otros filipinos comunistas, exiliados en este país durante largos años, deberían quizá buscar otra nación de acogida. Tarea que puede resultar difícil, especialmente para Sison, pues también está en la lista de terroristas de la UE. Sin embargo, como los Países Bajos no deporta a nadie a estados que apliquen la pena capital, anteriormente no le preocupaba a Sison que lo enviaran a Filipinas. Con la abolición de la pena de muerte en junio, su deportación es posible. Las pláticas de paz entre el gobierno y el Frente Nacional Democrático, el brazo político del CPP, se suspendieron en 2004, en tanto que los enfrentamientos violentos entre el ejército y el NPA se incrementaron.

Persecución de la izquierda

En años recientes ha aumentado en forma notoria el número de muertes de activistas políticos y comunitarios, entre éstos agricultores, dirigentes sindicales, ambientalistas, abogados y periodistas, la mayor parte relacionados con grupos de derechos humanos o con organizaciones legales de izquierda. Diversos informes aseveran que desde que la presidenta Arroyo llegó al poder, en 2001, hubo más de setecientos asesinatos extrajudiciales.¹⁵ De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), hay un patrón en estos asesinatos políticos: los asesinos suelen ser hombres enmascarados, no identificados, que escapan en motocicle-

¹⁵ Nonoy Espina, "CPP, Rights Group Mock Arroyo Deadline on Killings", *PDI*, 3 de agosto, 2006, disponible en http://newsinfo.inq7.net/breakingnews/nation/view_article.php?article_id=13327

ta tras disparar contra las víctimas y son rara vez capturados y enjuiciados. Al sospecha que miembros del ejército pueden estar involucrados (directa o indirectamente) en algunos de estos asesinatos.¹⁶ De acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Estados Unidos, al menos 29 periodistas filipinos fueron asesinados por motivos relacionados directamente con su trabajo, durante los últimos 15 años, lo que convierte a Filipinas en el quinto país con mayor número de periodistas asesinados en el mundo.¹⁷ Otras fuentes, que utilizan criterios distintos, mencionan un mayor número de muertos.

Para algunos observadores, los asesinatos estarían relacionados con el renovado ímpetu contrainsurgente del gobierno y su pronta fecha de término en 2010.¹⁸ Al equiparar a la izquierda con la rebelión armada, la administración de Arroyo ha autorizado el uso de escuadrones de la muerte, de bandas de vigilantes y de fuerzas paramilitares, no sólo contra quienes se alzaron en armas contra el gobierno, sino contra aquellos que buscan alternativas progresistas y pacíficas. No obstante, la historia demuestra que la represión de la disidencia abierta obliga a los activistas desarmados y a los críticos a pasar a la clandestinidad, lo que contribuye a engrosar las filas de la insurgencia. Los dos cuerpos gubernamentales creados para investigar estos asesinatos son la Comisión Melo, dirigida por civiles, y el Grupo Especial Usig, formado por policías; ambos carecen de la credibilidad e independencia necesarias para abordar el problema, especialmente porque se sospecha que el ejército puede estar involucrado en las matanzas.

El Mindanao musulmán

Nueve años después de que iniciaran las pláticas de paz entre el Gobierno de la República de las Filipinas (GRF) y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), al parecer las dos partes se han empantanado. Esto se debe a la determi-

¹⁶ "Philippines: Towards Ensuring Justice and Ending Political Killings", memorándum entregado a la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo por Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, 14 de septiembre, 2006, disponible en <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA350102006>

¹⁷ Committee to Protect Journalists, "CPJ Welcomes Verdict in Murder of Philippine Reporter Marlene Garcia-Esperat", *News Alert 2006*, disponible en <http://www.cpj.org/news/2006/asia/phil06oct06na.html>

¹⁸ Amando Doronila, "Proclamation No. 1017: Policy Matrix of Slaughter", *Analysis, PDI*, 4 de septiembre, 2006, p. A23; Randy David, "The Fight Against the Left", *Public Lives, PDI*, 18 de junio, 2006, p. A15.

nación del controvertido dominio ancestral, esto es, la extensión de la llamada Entidad Jurídica Bangsamoro (nación mora) y el proceso por el cual nuevas áreas, aparentemente dominadas por los musulmanes, formarán parte de esta entidad. Aunque está por firmarse un acuerdo de paz que pondrá fin a los largos años de guerras separatistas de Bangsamoro, ninguno de los dos bandos pudo llegar a un compromiso en la reunión, patrocinada por Malasia, que se celebró en septiembre en Kuala Lumpur. Por medio de los datos del censo de 2000, el gobierno propone, además de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), 679 aldeas dominadas por los musulmanes como "patria" de Bangsamoro; mientras que el FMLI desea más de 3 000 aldeas. El gobierno también quiere que se celebre un plebiscito en las áreas que se localizan fuera de la RAMM y que fueron seleccionadas para la inclusión en la entidad jurídica, a lo cual el FMLI se opone.

La RAMM se creó en 1990, con el fin de sofocar la rebelión musulmana en el sur de Filipinas y de acelerar el desarrollo económico en las áreas predominantemente musulmanas de Mindanao. Sin embargo, a lo largo de los años, numerosos funcionarios regionales y locales de la RAMM han sido criticados por corrupción y ausentismo, entre ellos Nur Misuari, primer gobernador de la RAMM y fundador del Frente Moro de Liberación Nacional, el grupo separatista musulmán de mayor antigüedad que firmó un tratado de paz con el gobierno en 1996.¹⁹ El FMLI considera que la RAMM es un fracaso, y que es tan sólo un paliativo político creado por el gobierno que no responde a las necesidades de Bangsamoro. Aplazadas durante años, las elecciones para funcionarios de la RAMM finalmente se celebraron en 2005.

Para el gobierno, la paz en Mindanao es indispensable para desarrollar el potencial de crecimiento de la isla, específicamente orientado hacia la agroindustria. Un tratado de paz con el FMLI afianzaría, tanto en el país como en el extranjero, la debilitada presidencia de Arroyo. También ayudaría a remediar las pobres condiciones socioeconómicas que han convertido al Mindanao musulmán en un semillero de grupos terroristas como Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah (JI). Los informes de que Mindanao no sólo es una base de entrenamiento de JI, sino que se ha convertido en un "área de operaciones", han producido una sensación de urgencia por lograr un acuerdo de paz.²⁰ Di-

¹⁹ Misuari fue gobernador de la RAMM de 1996 a 2001, año en que huyó a Malasia para evadir acusaciones de una posible instigación a una rebelión de corta duración en Sulu. En 2002, fue deportado a Filipinas. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario en Laguna, provincia cercana a Manila.

²⁰ Marites Dañguilan-Vitug, "Isolating Terrorists", *Newsbreak*, 21 de noviembre, 2005, p. 15.

cho acuerdo permitiría que los militares persiguieran a los terroristas en la región, sin las trabas de posibles violaciones del cese al fuego.

Para Al Haj Murad Ebrahim, jefe del FMLI desde 2004, y para los otros dirigentes moderados del Frente, un tratado de paz les permitiría aprovechar los beneficios concretos de pactar con el gobierno. Desde que la lucha disminuyó, hay una tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) en la RAMM, donde se halla la mayor parte de las áreas en conflicto. El PIBR de la autonomía creció 17.7% de 2003 a 2004.²¹ Además, con la creación de la Agencia de Desarrollo de Bangsamoro, se le ha otorgado mayor control al FMLI sobre los recursos para la mejora del área. Gracias al despliegue de un Equipo de Monitoreo Internacional de sesenta miembros, encabezado por Malasia, se impuso el cese al fuego desde 2004. En mayo el GRF y el FMLI invitaron a países no musulmanes a participar en este equipo, particularmente para ocuparse de proyectos de desarrollo en las áreas del conflicto. Japón y Suecia ya han aceptado participar.

El Grupo Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah

Obligados a abandonar su plaza fuerte en la isla de Basilán hace tres años a causa de las incesantes operaciones militares, los comandantes restantes del Grupo Abu Sayyaf y su ejército heterogéneo se reagruparon, al parecer, en la provincia de Sulu. De acuerdo con los informes de la inteligencia filipina e indonesia, y con testimonios de guerrilleros capturados de Jemaah Islamiyah (JI) —el grupo clandestino regional relacionado con Al-Qaeda— el sur de Filipinas es el principal terreno de entrenamiento y refugio de los dirigentes de JI.²² Se calcula que hay entre ochenta y cien miembros de JI (la mayoría indonesios) en Filipinas. La fácil entrada de supuestos terroristas al país se explica por una frontera porosa y mal vigilada y escasos recursos para la seguridad. La AFP y sus homólogos en Indonesia y Malasia han identificado siete rutas a través de Mindanao que utilizan los miembros de JI para entrar al país ilegalmente.²³ En el Congreso están pendientes diversos proyectos de ley contra el

²¹ Jowel F. Canuday, "Cease Fire!", *Newsbreak*, 2 y 16 de enero, 2006, p. 22.

²² Maria A. Ressa, "The New Strategic Base of Jemaah Islamiyah", *Newsbreak*, 25 de abril, 2005, p. 16.

²³ Marites Dañguilan Vitug, "Keep Politics Out", *Newsbreak*, 27 de febrero, 2006, pp. 18, 19.

terrorismo para afrontar algunos de estos problemas; pero la reacción pública ante tales proyectos ha sido de cautela, debido a la experiencia de los filipinos con la ley marcial y con la restricción de las libertades civiles.

Dudas sobre el Acuerdo de las Fuerzas Visitantes

El éxito de las fuerzas armadas para limitar los movimientos del Grupo Abu Sayyaf en Basilán se atribuye, en gran medida, a la asistencia y al entrenamiento militar de Estados Unidos. Los ejercicios militares conjuntos entre tropas filipinas y estadounidenses, llamados *Balikatan* —que en algunos casos comprendían 5 000 soldados—, intensificaron la presión sobre los rebeldes. Preocupa a Estados Unidos que los militantes musulmanes usen Mindanao como punto de lanzamiento de actividades terroristas, de modo que ha incrementado la ayuda económica y el entrenamiento militar en nuevas tácticas contraterroristas. A diferencia de las anteriores estratagemas bélicas en Basilán, en la provincia de Sulu, durante 2006, las tropas estadounidenses participaron en actividades puramente humanitarias, como son las misiones médicas y dentales, así como la planeación de acciones cívicas.

Los entrenamientos militares conjuntos que se realizan anualmente se establecieron en un acuerdo bilateral de 1999, conocido como el Acuerdo de las Fuerzas Visitantes (AFV), que Estados Unidos insiste en firmar con los países donde se encuentran desplegadas sus tropas. Recientemente se atacó al AFV por la supuesta violación de una filipina a manos de un militar estadounidense que gozaba de licencia nocturna junto con tres compañeros marines, en la antigua base naval de Estados Unidos en la bahía de Subic. Hubo enconadas reacciones de grupos de derechos humanos y de mujeres cuando la embajada estadounidense se negó a entregar la custodia de los militares acusados, a pesar de las órdenes de arresto en su contra emitidas por una corte local. Fue necesario que el Congreso amenazara con revocar el AFV para que los militares se presentaran ante la corte y fueran juzgados bajo la jurisdicción filipina. Sin embargo, causa gran preocupación una cláusula del AFV que libera a las autoridades estadounidenses de las obligaciones establecidas en el acuerdo si el juicio se prolonga más de un año. Éste comenzó el 27 de diciembre de 2005, y será extremadamente difícil para las autoridades filipinas ejecutar la sentencia antes del plazo establecido en la cláusula.

ECONOMÍA

Ampliación del IVA

En los momentos más críticos de 2005, cuando se exigía la renuncia de la presidenta Arroyo, la Suprema Corte emitió una repentina orden de restricción temporal a la aplicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Ampliado (IVA-A). La ley aumentó la cobertura del IVA para incluir sectores anteriormente exentos, como electricidad, combustible, transporte y servicios médicos. Se trataba de una parte clave del plan presidencial para incrementar los ingresos y, así, resolver el problema del crónico déficit presupuestal del país. La suspensión asestó un duro golpe a los esfuerzos del gobierno por aplicar una reforma fiscal y, en su momento, repercutió negativamente en la economía: el peso, la bolsa y los mercados de bonos se tambalearon. Disminuyó la confianza de los inversionistas extranjeros y retrocedió la calificación del país a los ojos de los administradores de fondos y de las agencias de valoración del crédito. Aunque las fuerzas contrarias a Arroyo esperaban que el anuncio de la ley provocaría un aumento en el precio de bienes y servicios y, por ende, un mayor descontento popular, no fue así. En febrero, después de una revisión, se aplicó la ley del IVA-A. Además, la tasa del IVA se incrementó de 10 a 12%. Se pretende que el IVA-A produzca ingresos adicionales de 82 600 millones de pesos filipinos en 2006. El gobierno espera que, gracias a este impuesto, aumente la recaudación hacendaria, que logró alcanzar 9.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2005, con lo que puso fin a siete años de disminución continua en la recaudación. No obstante, no se cumplió la meta del gobierno de una recaudación de 10.3% en ese año.²⁴

Mejoramiento de la economía

La economía, medida por el PIB, creció 5.6% en la primera mitad de 2006, y 6.5% al tomar como base el Producto Nacional Bruto (PNB) que incluye las remesas de los trabajadores filipinos en ultramar. Este resultado favorable se atribuye a un crecimiento mayor del esperado en varias áreas: la de exporta-

²⁴ Michelle V. Remo, "BIR Tax Effort Rose in 2005 to 9.9% of GDP", *PDI*, 17 de febrero, 2006, p. B8.

ciones (aumentó de 22.3% en relación con el año anterior), como resultado del incremento de las exportaciones electrónicas y de prendas de vestir; en agricultura (aumentó 6.7%), particularmente de granos y pesca; y servicios (5.7%).²⁵ El crecimiento económico también se vio favorecido por un incremento del gasto de los consumidores, por tasas de interés más bajas, por la mejora de la recaudación de impuestos, por la disminución del precio del combustible y por un importante flujo de remesas de los trabajadores filipinos en el extranjero. El gobierno confía en que cumplirá la meta de 5.5 a 6.1% de aumento del PIB para 2006. No obstante, si el Congreso no aprobara el presupuesto nacional de 2006 —obligando al gobierno a recurrir al presupuesto de 2005, revalidado nuevamente para este año— podría afectar adversamente el crecimiento del PIB, y hacer que sólo se alcance la meta inferior del crecimiento propuesto.²⁶

El presupuesto que se propuso para 2006 contemplaba un gasto mayor en infraestructura con el fin de estimular el crecimiento económico. En él se solicitaban 72 000 millones de pesos para invertirse en infraestructura, el mayor incremento de la década, pues el gobierno se había visto obligado a diferir o a cancelar nuevos proyectos por el déficit de ingresos. El grado del gasto en infraestructura de Filipinas es uno de los menores en Asia, ha caído de 8.5% del PIB, a fines de los noventa, a sólo 2.8% en la actualidad. La insuficiente infraestructura ha desalentado a los inversionistas extranjeros a establecerse en el país.

Debido, en gran parte, al peso fuerte y a la disminución de los precios del petróleo, la inflación tiende a la baja, con una tasa promedio de 6.8%, en los primeros nueve meses de 2006, inferior a la vaticinada por el gobierno de entre 7.3 y 7.9 para el año. El tipo de cambio del peso en noviembre —de 49.68 pesos filipinos por un dólar estadounidense— uno de los más altos en cuatro años y medio, se debió a las expectativas de que el flujo de envíos monetarios procedentes del extranjero alcanzaría cifras récord. El peso fuerte también ayudará a disminuir la deuda nacional. En febrero, la deuda representaba 71% del PIB; pero el gobierno se propone reducir la relación de la deuda con

²⁵ Gil C. Cabacungan Jr., "GMA Ecstatic Over Improving Economy", *PDI*, 1 de septiembre, 2006, p. A3.

²⁶ El Senado quería reducir en 64 mil millones de pesos el presupuesto nacional de 1.05 billones de pesos para el 2006, aprobado por la Cámara de Representantes, pero la presidenta Arroyo dijo que vetaría el presupuesto si no se eliminaban los recortes. En caso de que no se apruebe el presupuesto, se adopta automáticamente el del año anterior, que fue lo que sucedió este año.

el PIB a sólo 56% para 2008 con el fin de mejorar la percepción internacional de crédito.²⁷

La administración de Arroyo tuvo que hacer ajustes fiscales importantes durante los últimos dos años, mediante reformas económicas impopulares para enfrentar el enorme déficit presupuestal y el aumento de las deudas. En 2005, el gobierno logró reducir el déficit presupuestal a 146 500 millones de pesos, lo que representó una notable mejoría en relación con los 187 100 millones de pesos de 2004. En 2006 se espera que el déficit se reduzca a 125 000 millones de pesos, cantidad que todavía se encuentra lejos de la meta de la presidenta Arroyo de un presupuesto balanceado para 2008.

Remesas de los filipinos en ultramar

Solamente en el mes de septiembre, los trabajadores filipinos en ultramar enviaron a su país 1 010 millones de dólares por medio de canales oficiales (como bancos, centros comerciales de envíos), lo que representa un incremento de 7.6% con respecto al año anterior. El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), el banco central, dio a conocer que las remesas enviadas durante los primeros nueve meses de 2006 llegaron a 9 110 millones de dólares, un incremento de 14.4% en relación con el mismo periodo del año anterior.²⁸ El BSP espera que el total de remesas que se envíen mediante bancos durante 2006 alcance la cifra de 11 870 millones de dólares, lo que superaría la cifra récord del año anterior: 10 700 millones de dólares. El BSP estima que además entre 10 y 20% de las remesas no se cuantifican porque se envían por medio de amigos o de otros canales informales. Así, la suma real que envían los trabajadores filipinos en el extranjero a sus familiares en Filipinas podría ser significativamente mayor.

Las remesas de estos trabajadores incrementan considerablemente el gasto de los consumidores, y son más importantes para sostener la economía que el gasto oficial a causa de los perdurables problemas fiscales del gobierno. Para las autoridades las remesas son un indicador económico significativo, puesto que ayudan a sacar a familias de la pobreza al elevar los fondos para

²⁷ Michelle V. Remo, "National Gov't Debt Hit P3.96T in March", *PDI*, 20 de junio, 2006, p. B6.

²⁸ "September Remittances Rise 7.6%", *Inq7express*, 15 de noviembre, 2006, disponible en http://services.inquirer.net/express/06/11/15/html_output/xmlhtml/20061115-32705.xml. html

educación, atención médica y desarrollo de empresas. Además, el dinero que envían al país los trabajadores en el extranjero ha provocado un auge en los bienes raíces, porque dichos trabajadores compran propiedades y construyen casas en Filipinas no sólo para sus familias, sino también como inversión. Profesionales altamente calificados —que reciben por ende mejores salarios— buscan trabajo en el extranjero y envían más dinero a casa.

ASUNTOS INTERNACIONALES

Participación activa en el extranjero

Filipinas ha estado activa en la arena internacional durante 2006. Fue elegida para ocupar un escaño en el Consejo Económico y Social, uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. La elección tuvo lugar poco después de que el país lograra obtener un escaño en el recién establecido Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante dos años (2004 y 2005). Asimismo, Filipinas será sede de la decimosegunda reunión de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, compuesta por diez miembros, a la que asistirán alrededor de 16 jefes de Estado y que se celebrará en la ciudad de Cebú en diciembre.

Exploración conjunta de las islas Spratly

Las compañías petroleras estatales de Filipinas, China y Vietnam firmaron un acuerdo para una Empresa sísmica marítima conjunta en 2005, con el fin de explorar las disputadas islas Spratly en busca de potenciales reservas de petróleo. Bajo las disposiciones del acuerdo, que tiene una duración de tres años, China reunirá los datos, Vietnam los procesará y Filipinas los interpretará. Si los datos procedentes de la investigación submarina en un área de 11 000 kilómetros resultan alentadores, se llevará a cabo otra serie de estudios geofísicos. Las reservas de petróleo en las Spratly se estiman entre 2 000 millones y 200 000 millones de barriles, lo que representaría un enorme beneficio para los países de la región que importan petróleo, como es el caso de Filipinas²⁹

²⁹ Miriam Grace A. Go, "Exploring the Spratlys", *Newsbreak*, 28 de agosto, 2006, pp. 28-29.

—además de estos tres países, Brunei, Malasia y Taiwan reclaman la posesión de las Spratly. Por otra parte, si de los datos arrojados por esta empresa conjunta surgieran pruebas que sustenten la reclamación de la plataforma continental filipina (es decir, si se confirmara que el área terrestre submarina en las Spratly, que se ha hecho menos densa en el transcurso de millones de años, es una extensión del área en Palawan), el gobierno de Arroyo cree que el país contaría con bases más sólidas para reclamar este territorio.

Relaciones con China

Las relaciones económicas de Filipinas con China han crecido de manera sorprendente durante los últimos años. El comercio entre los dos países pasó de 33 000 millones de dólares en 2000 a 17 600 millones de dólares en 2005.³⁰ China se convirtió en el cuarto socio comercial de Filipinas en 2005, después de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (UE). Cabe recordar que en 2001 China ocupaba el lugar número 12. Los artículos filipinos más exportados a China son semiconductores, refacciones y accesorios de maquinaria, componentes eléctricos y electrónicos y microensamblados electrónicos. Cerca de un tercio del total de las exportaciones de artículos de este tipo de Filipinas va a China.

En julio, China ofreció 6 000 millones de US dólares en préstamos blandos para proveer fondos destinados a los proyectos masivos de infraestructura de la presidenta Arroyo. Además, por primera vez, China prometió ayuda al AFP: equipo militar con un valor aproximado de 1.2 millones de US dólares. El afán de China por ayudar a su vecino y por ampliar su influencia económica regional se debe, en gran medida, a que cuenta con reservas en efectivo cercanas al billón de dólares, las mayores del mundo. Mientras Filipinas contaba con reservas en divisas extranjeras de 21 560 millones de dólares a finales de septiembre, China tenía 987 900 millones de dólares en el mismo periodo.³¹

³⁰ Carlos H. Conde, "The Chinese Factor", *Newsbreak*, 23 de octubre, 2006, disponible en <http://newsbreak.com.ph/newsbreak/story.asp?ID=828>

³¹ Victor N. Arches II, "Move Over, America", *Inq7.net*, 2 de noviembre, 2006, disponible en http://globalnation.inq7.net/mindfeeds/mindfeeds/view_article.php?article_id=30156

CONCLUSIONES

A más de dos años de su elección, la presidenta Arroyo aún carece de legitimidad. Han pasado más de cinco años desde que ocupó el cargo para reemplazar al presidente Joseph Estrada, quien fuera destituido, y aún enfrenta los mismos retos: el problema de la pobreza y la desigualdad. Las estadísticas del gobierno calculan que tres de cada diez filipinos son pobres (30%). Pero una investigación de SWS, realizada en octubre, muestra que 51% de las familias filipinas se considera pobre.³² Por otro lado, detrás del inmenso flujo de ingresos por remesas y de sus beneficios, está el hecho descorazonador de que millones de filipinos tienen que abandonar su país para obtener en el extranjero lo que no pudieron ganar en su patria. Filipinas sigue siendo un país de grandes incertidumbres. La presidenta tiene esperanzas de que algunas buenas oportunidades en puerta —un peso fuerte, una economía en ascenso, las negociaciones con los musulmanes filipinos, las iniciativas para una reforma constitucional, entre otros— logren poner fin a la atmósfera de crisis y en que, de este modo, pueda reivindicar su liderazgo. No obstante, sus críticos temen un resultado diferente, en el que la presidenta, debido a su obsesión por el poder, dilapide las variables positivas y en el que la represión —no la reforma, ni el compromiso ni una dirección competente— se convierta en la herramienta preferida para abordar las innumerables tensiones políticas pendientes y para hacer frente a las calamidades económicas.

³² Social Weather Stations, "Third Quarter 2006 Social Weather Survey: Hunger Hits Record 16.9% of Families Again; 51% Are Poor/Mahirap", 31 de octubre, 2006, disponible en <http://www.sws.org.ph>

APÉNDICE

<i>Nombre oficial</i>	República de las Filipinas
<i>Capital</i>	Manila
<i>Extensión territorial (miles de km²)</i>	300
<i>Población 2002 (millones)</i>	82
<i>Religión(es)</i>	Mayoría católica. Existe una minoría musulmana y protestante
<i>Idioma(s)</i>	El tagalog es el idioma oficial. Existe un gran número de idiomas regionales. El inglés es obligatorio en la enseñanza y su uso es frecuente en la administración y los medios de comunicación
<i>Moneda</i>	Peso/P
<i>Gobierno</i>	Régimen presidencialista matizado por un poder legislativo bicameral
<i>Principales organizaciones políticas:</i>	Lucha de los Filipinos Demócratas (LDP), Partido Liberal, Partido Nacionalista, Coalición Nacional Popular (CNP), Movimiento para una Nueva Sociedad, Partido Popular por la Reforma, Lakas ng EDSA-Union Nacional de Cristianos Demócratas (Lakas)
<i>Presidente</i>	Gloria Macapagal-Arroyo
<i>Vicepresidente</i>	Noli L. de Castro
<i>Presidente del Senado</i>	Manuel B. Villar, hijo
<i>Presidente de la Cámara de Representantes</i>	José C. de Venecia
<i>Presidente de la Suprema Corte</i>	Artemio V. Panganiban
<i>Gabinete</i>	
<i>Secretario Ejecutivo</i>	Eduardo R. Ermita
<i>Reforma Agraria</i>	Datu Nasser C. Pangandaman
<i>Agricultura</i>	Arthur C. Yap
<i>Presupuesto y Administración</i>	Rolando G. Andaya, hijo
<i>Educación</i>	Jesli A. Lapus
<i>Energía</i>	Raphael P. M. Lotilla
<i>Ambiente y Recursos Naturales</i>	Angelo T. Reyes
<i>Finanzas</i>	Margarito B. Teves
<i>Relaciones Exteriores</i>	Alberto G. Romulo
<i>Salud</i>	Francisco T. Duque III
<i>Gobernación y Gobierno Local</i>	Ronaldo V. Puno
<i>Justicia</i>	Raul M. Gonzalez
<i>Trabajo y Empleo</i>	Arturo D. Brion
<i>Defensa Nacional</i>	Avelino J. Cruz, hijo
<i>Prensa y Vocero de la Presidencia</i>	Ignacio R. Bunye
<i>Obras Públicas y Carreteras</i>	Hermogenes E. Ebdane, hijo
<i>Ciencia y Tecnología</i>	Estrella F. Alabastro

APÉNDICE (continuación)

<i>Bienestar Social y Desarrollo</i>	Esperanza I. Cabral
<i>Turismo</i>	Joseph H. Durano
<i>Comercio e Industria</i>	Peter B. Favila
<i>Transporte y Comunicaciones</i>	Leandro R. Mendoza
<i>Director General de Economía</i> <i>y Desarrollo Nacionales</i> <i>y Secretario de Planeación</i> <i>Socioeconómica</i>	Romulo L. Neri
<i>Jefe del Personal de la</i> <i>Administración Pública</i>	Cerge M. Remonde
<i>Jefe del Estado Mayor</i>	Michael T. Defensor
<i>Consejero de Seguridad Nacional</i>	Norberto B. Gonzales
<i>Secretario del Gabinete</i>	Ricardo L. Saludo
<i>Gobernador del Bangko Sentral</i> <i>ng Pilipinas (banco central)</i>	Amando M. Tetangco, hijo
<i>Procurador General</i>	Antonio Eduardo Nachura
<i>Ombudsman</i>	Merceditas N. Gutierrez
<i>Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas</i> <i>Armadas de Filipinas</i>	Gen. Hermogenes C. Esperon, hijo
<i>Director General de la Policía</i> <i>Nacional Filipina</i>	Gen. Oscar C. Calderon
